

DESAPARECIDOS

UNA PUBLICACION DEL COMITE DE FAMILIARES DE DETENIDOS - DESAPARECIDOS EN HONDURAS (COFADEH)

AÑO 4

No. 32

JUNIO, 1995

TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C. A.



Nora Gómez de Barillas

Era la secretaria de Monseñor Oscar Arnulfo Romero, salvadoreña de 29 años de edad, fue desaparecida en Tegucigalpa el 22 de abril de 1981

Después del asesinato del profeta centroamericano en 1980, Nora emigró a la capital hondureña donde estableció residencia temporal en la colonia Primavera.

Junto a 14 compatriotas suyos y dos hondureños integraron aquí la Comunidad Cristiana Monseñor Romero. El día del secuestro por agentes de la DNI fue llevada junto a su esposo Mauricio Barillas y sus tres hijos Nora Patricia (11), Gerardo Mauricio (9) y José Daniel (5).

Según los reportes periodísticos de la época, los niños y una anciana fueron entregados en mayo del mismo año con nombres falsos a las autoridades migratorias de El Salvador, en el puesto fronterizo de El Amatillo.

Los menores fueron ofrecidos en adopción bajo el argumento oficial de haber sido abandonados por sus padres. Afortunadamente, sus verdaderos parientes dieron con su paradero en El Salvador y los recuperaron. Todos los demás son aún desaparecidos en Honduras.

Pese a los esfuerzos de Amnistía Internacional, las autoridades civiles y militares hondureñas sólo dieron excusas y evasivas.

Con esta comunidad cristiana empezó la práctica sistemática de las desapariciones forzadas por razones políticas, que dejó hasta 1990 un aproximado de 185 víctimas.

THE SUN

Los periodistas estadounidenses Gary Conh y Ginger Thompson del diario **The Sun** invirtieron 14 meses para encontrarse con víctimas y victimarios de las desapariciones forzadas en Honduras y entregar al mundo, finalmente, una serie de cuatro reportajes rigurosamente históricos en la segunda semana de junio.

Basados en el informe preliminar **Los Hechos Hablan Por Sí Mismos** del Comisionado Nacional para la Protección de los Derechos Humanos, Leo Valladares, los periodistas recorrieron Estados Unidos, Canadá, México, el Caribe, Guatemala y Honduras persiguiendo la verdad.

Además de revivir en Canadá las historias de sangre e ignominia protagonizadas por torturadores en contra de detenidos en Tegucigalpa y San Pedro Sula, los periodistas revelaron información secreta archivada en el Departamento de Estado Norteamericano sobre actividades violatorias de los derechos humanos por la CIA y la embajada americana en Honduras.

También buscaron a las víctimas sobrevivientes, algunas residentes en países de Centroamérica, y a los que dieron las órdenes, los políticos que aplaudieron, los militares que ordenaron y los diplomáticos que desinformaron a su gobierno.

Después de publicada aquí esta serie periodística, diversas reacciones se han producido. Cada quien ha respingado según el tamaño de su chimadura. Desde los cínicos que dicen no haber descubierto nada nuevo, hasta los soberbios que eso ya lo habían dicho ellos en sus periódicos, sin faltar los imberbes y los solidarios, los recelosos y los justicieros.

En el COFADEH confluyeron emociones fuertes. Decíamos que los culpables deben saber que no hay ni habrá secreto definitivo que pueda mantenerse guardado eternamente, aunque su revelación nos haga sufrir otra vez. Pero siempre que se sepan más y más detalles, más y nuevos nombres, pueden estar seguros que el silencio no será permanente, que muchos otros testigos confesarán, y entonces la justicia no tendrá excusa para no proceder. Eso nos alegra.

Espere próximamente una publicación especial con la serie de **The Sun** y las reacciones en **desaparecidos**.

En Retroceso

Honduras vive la postguerra fría marcada por la inseguridad ciudadana, la extrema pobreza, una creciente agitación social y una evidente crisis de liderazgo para gobernar.

Viejas y nuevas formas de violencia han desnudado la incapacidad de la Fuerza de Seguridad Pública (FSP) y la improvisación del Gobierno.

Las estadísticas de la propia FSP divulgadas por la prensa revelan que los delitos se han quintuplicado en el período.

En 1994 se registraron 10,456 delitos contra las personas, mientras que en 1993 sólo se reportaron 2,784, de acuerdo a datos divulgados por el comandante de la Fuerza de Seguridad Pública (FSP), coronel Roberto Lázarus.

El oficial también informó que el año pasado la policía detuvo a 22,264 sospechosos de la comisión de delitos. La cifra en 1993 fue de 16,724. La mayoría, sin embargo, son dejados en libertad por falta de pruebas aportadas en su contra.

La argumentación del jefe de la FSP es que la delincuencia aumenta por el excesivo consumo de alcohol, por la pobreza y la falta de oportunidades laborales. Pero no dice que es por el comercio de armas y municiones pesadas que la "armería" militar estimula sin control.

Tampoco dice que las bandas de delincuentes organizados son integradas por militares efectivos y retirados que poseen métodos y equipos especializados, razón objetiva para explicar su efectividad al operar.

Para salirle al paso a los reclamos populares ante la inseguridad, los mandos policiales en coro con el jefe de las Fuerzas Armadas han demandado a los diputados más presupuesto para mejores salarios y logística para mayor reacción.

También han propuesto la integración de Comités de Vigilancia Ciudadana, especialmente en la zona noroccidental del país a la que llaman "el corredor de la muerte", que se extiende desde las fronteras Honduras-El Salvador, Honduras-Guatemala hasta las costas del Atlántico.

52 Comités bajo esa denominación han sido integrados con el auspicio y asesoría de la Comandancia de la FSP.

Estas estructuras paramilitares son justificadas como genuinas organizaciones comunitarias nacidas de la necesidad de mayor seguridad pública. Pero su proceder no puede menos que evocar los años ochentas cuando fueron el soporte social y político de la represión.

Ahora son siempre una estructura para delinquir, pues son grupos clandestinos de "profilaxis social", ejecutores de supuestos delincuentes comunes.

Un ejemplo es el escuadrón "los lobos" que operaba en Cofradía, Cortés, descubierto por la prensa escrita como un escuadrón de muerte equipado con armas de grueso calibre, chalecos antibalas, sistemas de comunicación, carnets y vehículos para patrullar, además del consentimiento de los mandos regionales de la policía.

El mismísimo jefe del comando regional # 3 de la policía en San Pedro Sula, coronel Arnoldo Cabrera Padilla- ex-miembro del escuadrón de la muerte 3-16- fue acusado de estimular la delincuencia a través de grupos como el mencionado.

Arturo Humberto Ramos, padre del supuesto delincuente José Antonio Ramos Urbina asesinado el 29 de enero de 1995 en

San Pedro Sula por denunciar el modus operandi de la policía, acusó al coronel Cabrera de comandar un escuadrón ejecutor de ladrones en la Costa Norte, integrado por ex-agentes de la desaparecida DNI, y además de tener parte en el negocio de tráfico de drogas y robo de vehículos.

La Comisión Ad Hoc de Alto Nivel habría de solicitar más tarde (en mayo) la cabeza de este policía-militar ante las evidencias recibidas en su contra en el seno de dicha Comisión. El oficial fue depuesto en junio como parte de un plan general que incluye además reformas penales y el traspaso de la policía al control civil.

Aunque parezca increíble siguen siendo comunes las detenciones ilegales, las torturas, los allanamientos domiciliarios, los atentados a bienes y personas, las ejecuciones sumarias, sin castigo para nadie aún.

En el período que comprende esta publicación se reportan 27 supuestos delincuentes comunes asesinados con armas de fuego y cuchillos.

En otra categoría de ejecuciones sumarias destacan las perpetradas en contra del mayor retirado Juan Pablo Rivas Calderón, la ecologista Janneth Kawas y el teniente Gustavo Andrés Domínguez.

Sólo en San Pedro Sula en los primeros meses de 1995 han sido detonados 28 artefactos explosivos en distintos sitios de la ciudad, uno de ellos cerca del Presidente Reina, sin respuesta efectiva de la policía.

Las amenazas de muerte han vuelto a ser una constante.

En el mes de febrero el fiscal general de la República, Edmundo Orellana, denunció que dos agentes de la DIC fueron amenazados a muerte por teléfono por el oficial Bonilla, asignado a la FSP en Tegucigalpa.

En marzo, el propio director de la Dirección de Investigación Criminal (DIC), doctor Wilfredo Alvarado, denunció estar siendo amenazado a muerte.

En abril, el 07, la viuda del mayor Rivas, doña Bessy Jerezano, denunció ante el Cofadeh que dos hombres que se conducían a bordo de un vehículo Pathfinder, vidrios polarizados y sin placas, le intimidaron e incluso intentaron secuestrarla, en Comayagüela.

A esta lista se agregó el Comisionado Nacional para la Protección de los Derechos Humanos, Leo Valladares, quien denunció el 25 de abril que las amenazas persisten en contra suya y de su familia.

Así, el panorama en materia de derechos civiles y políticos no parece favorable para quienes buscamos rectificación institucional basada en justicia y verdad. Retrocedemos. Las manifestaciones de la cultura autoritaria heredada de la década anterior, persisten.

Los medios de comunicación reflejan cada día los estragos de la crisis económica profundizada con los nuevos programas de ajuste, el creciente malestar de los trabajadores, la falta de liderazgo en los partidos tradicionales y la frustrada lucha contra la corrupción y la impunidad.

La tendencia parece peligrosa. Hay signos evidentes de ingobernabilidad. Hacia dónde nos llevan?, preguntamos a quienes ejercen el poder...



La excusa pública de la comandancia de la policía fue que el coronel Arnoldo Cabrera Padilla era separado de su cargo en San Pedro Sula por fatiga. Los que saben la verdad, se ríen. Sobre él pesan muchas denuncias de violaciones a los derechos humanos.

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

(enero-junio de 1995)

DERECHOS A LA VIDA							
	E	F	M	A	M	J	Total
Homicidios por abuso de autoridad	0	0	1	1	3	3	8
Homicidios por autoría sospechosa	1	5	5	6	2	1	20
Asesinatos Políticos	0	0	0	0	0	0	0
Atentados Contra Personas	14	2	13	3	2	2	36
Asesinatos de supuestos delincuentes	8	3	2	4	5	5	27
Atentados contra bienes	2	1	2	0	0	0	5
Amenazas a Muerte	2	3	10	10	1	3	29
Total	27	14	33	24	13	14	125

DERECHO A LA INTEGRIDAD FISICA							
	E	F	M	A	M	J	Total
Torturas	6	4	5	2	2	10	29
Lesiones Graves y Golpes	2	5	5	4	2	4	22
Total	8	9	10	6	4	14	51

DERECHO A LA LIBERTAD							
	E	F	M	A	M	J	Total
Detenciones Ilegales	12	0	31	3	1	2	49
Otras detenciones	0	0	9	11	0	0	20
Desaparición Forzada	0	0	0	0	0	0	0
Total	12	0	40	14	1	2	69

DERECHO A LA INVIOABILIDAD DEL DOMICILIO							
	E	F	M	A	M	J	Total
Allanamientos Domiciliarios	1	0	1	0	1	4	7
Desalojos	0	2	1	1	0	1	5
Total	1	2	2	1	1	5	12

DERECHO A LA LIBERTAD							
	E	F	M	A	M	J	Total
Atentados contra libertad de información	5	3	0	0	2	0	10
Censuras y otras Restricciones	0	0	0	0	0	0	0
Total	5	3	0	0	2	0	10

DERECHO A LA LIBERTAD DE CIRCULACION							
	E	F	M	A	M	J	Total
Retenes en Sitios determinados	0	1	0	0	0	0	1
Restricciones a entrar y salir del país	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	1	0	0	0	0	1



Tomada de El Nuevo Día, 16 de junio, 1995

Arrancó la segunda legislatura en el Congreso Nacional bajo la expectativa popular de cuándo sería ratiificado el Servicio Militar Voluntario aprobado por unanimidad en mayo de 1994.

Pero en la agenda de los diputados, otros puntos estaban incluidos: reformas constitucionales para cambiar el sistema judicial y la elección de los magistrados, traspaso de la Fuerza de Seguridad Pública a control civil y reformas al Código Penal para reprimir la delincuencia juvenil.

Estos dos últimos temas aún son debatidos dentro y fuera del Congreso, sin tomarse aún una decisión.

La delincuencia, y en general la violencia, siguen sumando inseguridad y luto entre la población.

El **4 de enero** fue asesinado a balazos en San Pedro Sula el mayor retirado Juan Pablo Rivas Calderón, gerente propietario de una compañía privada de seguridad, colaborador del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (CODEH). Los parientes de la víctima responsabilizaron al ex-jefe de las Fuerzas Armadas, general Humberto Regalado Hernández, por el asesinato.

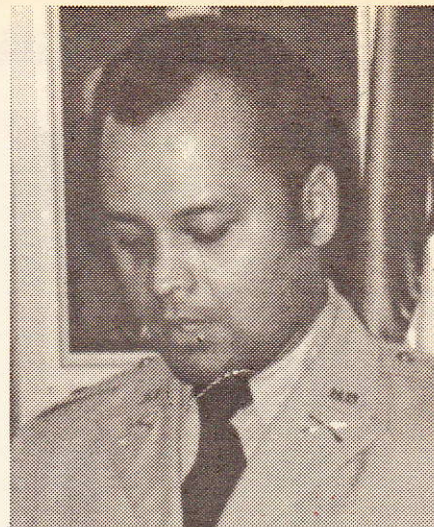
En 1985 este general fue denunciado por el mayor Rivas como corrupto por inventar puestos y cargos en la Fuerza Naval cuyos salarios cobraba para su beneficio. La viuda Bessy Jerezano de Rivas y sus hijos son vigilados y perseguidos por desconocidos después del asesinato. Temen por su vida. El

juicio no reporta aún cárcel para nadie.

Después de este hecho criminal, información confidencial revelada al Cofadeh establece que una unidad especial del Ejército pretendía asesinar al educador popular de este Comité, Leonel Casco, para generar confusión asociando su muerte a una denuncia pública que éste hiciera en julio de 1992 contra directivos del CODEH. La operación, abortada a tiempo, buscaba debilitar una acción pública que preparaba el **Codeh** tras la muerte del mayor Rivas Calderón, quien reveló aquí muy antes de su muerte detalles de la corrupción y abusos de los militares.

El **23 de enero**, en medio del escepticismo de los militares y la esperanza de la población fue inaugurada oficialmente la Dirección de Investigación Criminal (DIC), policía técnica auxiliar de los tribunales de justicia, dependiente del Ministerio Público. El médico psiquiatra Wilfredo Alvarado y el ex-mayor de policía Saúl Bueso Mazariegos son el director y subdirector, respectivamente.

El **28 de enero**, dos supuestos terroristas asignados a la Guardia de Honor Presidencial y conectados a la unidad de Comunicaciones Estratégicas del Ejército de Honduras participaron en un operativo para crear caos entre la seguridad presidencial mediante el estallido de un artefacto explosivo cerca del gobernante, en la colonia Prado Alto de San Pedro Sula. El Presidente Reina -que participaba en la inauguración de un complejo comercial honduro-salvadoreño-, resultó ileso, pero dos conductores oficiales resultaron heridos, cuatro vehículos dañados y la Guardia de Honor Presidencial asustada.



Mayor Juan Pablo Rivas Calderón. Mientras su crimen sigue en la impunidad, su familia busca el exilio ante las amenazas.

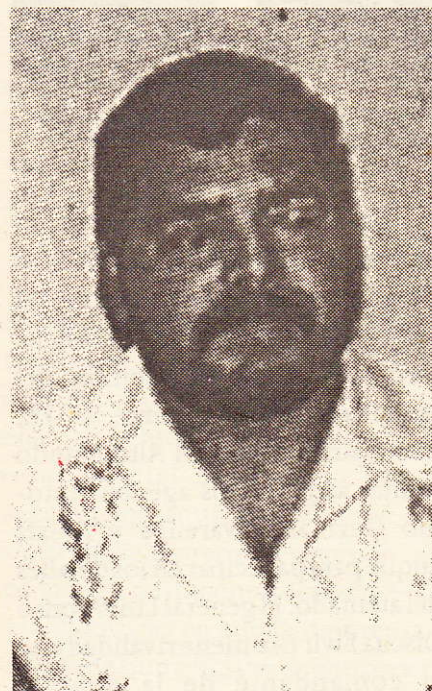


Wilfredo Alvarado, psiquiatra: director de la DIC.

De acuerdo con información de Inteligencia Militar confiada al Cofadeh y divulgada durante el primer plantón de febrero, el oficial Jordi Montañola, ex-miembro del **escuadrón de la muerte 3-16**, con instrucciones del Alto Mando Militar asignó a los agentes Antonio Guzmán Alvarenga y Alexis Luque para participar en los detalles del atentado. El general Luis Alonso Discua Elvir mantiene rivalidad con el comandante de la guardia presidencial, el disidente coronel Alvaro Romero.



Jannete Kawas Fernández. Era una "turca loca, peligrosa e incómoda" para los depredadores, quién ordenó su muerte?



Teniente José Dolores Rivera Rodríguez. Teme que atenten contra su vida.

!Rosas, lirios y caracoles para Jannete Kawas Fernández! Fue asesinada la noche del **6 de febrero** en forma cobarde por criminales a sueldo, en su propia casa, en Tela Atlántida. Jannete era presidenta de la Fundación **prolansate** dedicada a la defensa del jardín botánico Lancetilla y el parque marino Puntasal, un paraíso objeto de codicia entre militares, inversionistas extranjeros, campesinos y agroindustriales. Era una **"turca loca, peligrosa e incómoda"** para los depredadores. La policía aún no da con el paradero de los asesinos.

Aprovechando la asistencia de su superior a la celebración del Día de la Virgen de Suyapa el **3 de febrero**, el teniente José Dolores Rivera Rodríguez-jefe de la compañía B de fusileros del batallón Agrupamiento Táctico Especial- solicitó protección personal y jurídica al Cofadeh argumentando una situación de extremo peligro propiciada en su contra por el coronel Carlos Andino Benítez, comandante de la unidad.

Fue el primer precedente de esta naturaleza atendido en una organización de parientes de víctimas de desaparición. De momento, el oficial salvó su vida y la de su familia advirtiéndole al coronel Benítez que si insistía en acusarlo del robo de un viejo fusil y dos servicios sanitarios desechados, él contaría a este Comité sus fechorías en el batallón de la muerte 3-16 e incluso sus desviaciones conductuales, como en efecto lo hizo.

Después de comunicada públicamente la protección del oficial, el coronel Benítez exhortó al Cofadeh a

través de los medios de comunicación a no ocultar delincuentes dados de baja deshonrosa y sujetos a juicio en la instancia militar. No obstante, la asesoría legal del Comité confió en la versión del perseguido, en su documentación autenticada y continúa ofreciéndole protección humanitaria aún después de que el señor Santos Regino Lagos se declarara ante el juez confeso del delito de hurto que se imputa a Rivera Rodríguez.

Por fin, el gobierno hondureño honró ante la Comisión de Derechos Humanos de la OEA el retrasado pago de la indemnización compensatoria a los familiares de los desaparecidos Manfredo Velásquez y Saúl Godínez, establecida en 1988 en sentencia condenatoria por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en San José, Costa Rica.

El canciller Ernesto Paz Aguilar entregó el cheque por 162,000 dólares (un millón 587 mil 600 lempiras), según un despacho de **EFE** desde Washington en "un acto de verdadera trascendencia histórica para los derechos humanos en el hemisferio", en un gesto de "íntima satisfacción para el Gobierno de Honduras".

Paz Aguilar informó que existen aproximadamente 10 expedientes más que están siendo analizados por la CIDH para su enjuiciamiento, pero que el gobierno de Honduras está proponiendo a los parientes una solución amistosa en el marco del artículo 48 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos.

Los temas del servicio militar voluntario, el traspaso de la policía a los civiles y la truncada lucha contra los corruptos, fueron los más importantes en las páginas de los diarios, los espacios radiofónicos y las pantallas de la televisión este mes.

Tuvieron los políticos nacionalistas que desnudar sus bajas pasiones por los militares al aliarse con ellos en los propósitos de frustrar la ratificación del servicio militar **voluntario, educativo, social, humanista y democrático**. Pero no lo lograrían, aunque en su cambio de opinión a favor de la ratificación en el Congreso acuñaron la trampa de un incremento presupuestario para pagar salario mínimo a los nuevos reclutas voluntarios.

El **6 de marzo**, el presidente Reina en Consejo de Ministros reactivó la Comisión Ad Hoc de Alto Nivel para la prevención y lucha contra la delincuencia y la violencia que alcanzaron índices alarmantes en Honduras. La comisión, que reúne a representantes de todas las fuerzas beligerantes del país, es presidida por segunda vez por monseñor Oscar Andrés Rodríguez, arzobispo de Tegucigalpa.

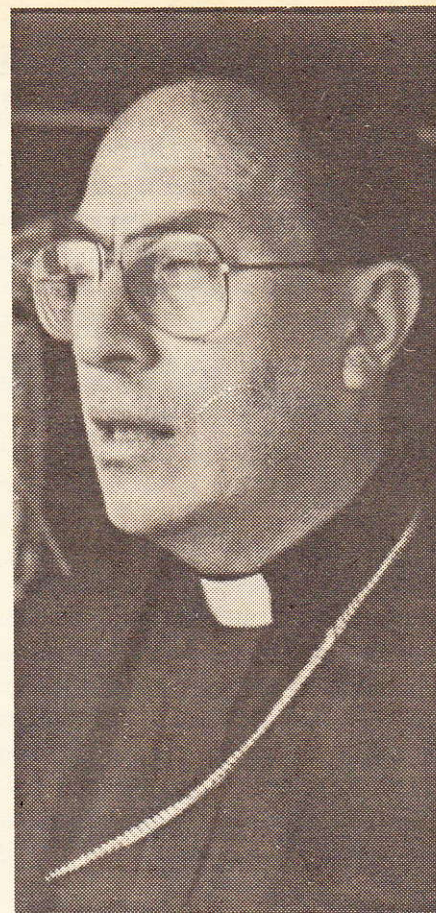
El **7 de marzo** en una acción sincronizada estallaron tres explosivos propagandísticos en Tegucigalpa y San Pedro Sula: uno en la sede del Consejo Central del Partido Liberal, otro frente

al canal 7 de televisión y el tercero en la calle peatonal de San Pedro Sula. Los estallidos fueron reivindicados por el grupo anticastrista Movimiento de Solidaridad Centroamericana (MOSCA), que excita a los militares a un golpe de Estado.

Para sorpresa de muchos, el Presidente Carlos Roberto Reina instruyó el **9 de marzo** a su designado Walter López Reyes para que firmara el decreto de cancelación de la Comisión Presidencial de Prevención y Lucha contra la Corrupción (COPRELCO), aún cuando no alcanzaba ni la mitad del plazo para el cual había sido creada en 1994 y tampoco concluía investigaciones claves. Argumentaron que lo hacían porque habría dualidad de funciones con la Comisión Ad Hoc. Monseñor Rodríguez respondió que él no investigaría corrupción.

La decisión hizo suponer "arreglos" políticos al más alto nivel a cambio de "cesar la persecución contra los corruptos y violadores de derechos humanos del gobierno anterior". La revolución moral comenzó a hacer aguas.

A mediados de este mes fue publicada por Radio América una carta que le saca los trapos sucios al general Luis Alonso Discua Elvir, actual jefe de las Fuerzas Armadas, millonario de nuevo cuño: con edificios de apartamentos, casas de campo, cuentas bancarias, abultadas operaciones financieros, compra-venta de armas, etc, etc.



Monseñor Oscar Andrés Rodríguez: porta estandarte del poder de Dios o instrumento de los poderosos?



General Luis Alonso Discua, heredó además de la inteligencia del escuadrón 3-16 el arte para hacer negocios turbios desde el poder.

El **seis** de este mes hubo júbilo en el seno de las fuerzas sociales hondureñas, especialmente en las que habían pujado por la ratificación en el Congreso Nacional de la reforma constitucional que abolía el servicio militar obligatorio y lo convertía en **voluntario y educativo**.

Por fin, después de los dolores del parto en los interesados vientres de diputados militaristas y militares cabildeadores, la nueva creatura llegó con su llanto a marcar un hito en las relaciones cívico-militares en Honduras.

Por abrumadora mayoría, a excepción de dos diputados opuestos, la obligatoriedad del servicio militar fue desaparecida del texto constitucional, igual que los salvajes métodos de reclutamiento-secuestro empleados contra la juventud quedaron proscritos para siempre.

Sabio y oportuno, sin duda así se le calificó al Presidente Carlos R. Reina por haber interpretado y cumplido a tiempo esta demanda popular, recogida durante su campaña como promesa.

También en este mes de abril hubo ejemplos de aplicación de la revolución moral en el terreno ético. El ministro de relaciones exteriores, Ernesto Paz Aguilar, fue renunciado de su cargo, por haber permitido supuestamente que una de sus hermanas, Marielos Paz, participara en el negocio ilegal de tramitar pasaportes oficiales a

inmigrantes con destino a Estados Unidos. La renuncia, aceptada por el Presidente, argumenta "razones personales".

Además, las turbas de activistas políticos pagados irrumpieron contra el Juzgado Primero de Letras de lo Criminal pretendiendo influir en el ánimo del juez Roy Medina, quien remitió a la Penitenciaría Central al alcalde de Tegucigalpa Roberto Acosta acusado de abuso de poder y malversación de caudales públicos.

Acosta recuperó su libertad provisional seis días después del encarcelamiento, en medio de la algarabía de sus defensores asalariados y en una evidente manifestación de presiones políticas sobre el sistema judicial.

Siempre en abril, en forma prematura, pero bien calculada, comenzaron los oficiales de la Octava Promoción a intensificar sus pláticas y "cabildeos" con los políticos y periodistas locales para asegurar un traspaso seguro del mando militar a sus manos, una vez que termine por fin la dictadura de la Sexta Promoción de los "inteligentes" al mando del general Luis Alonso Discua Elvir, primer comandante del Batallón de la Muerte 3-16.

Discua deberá entregar el mando en enero de 1996 y con él muchos de los violadores de derechos humanos aún impunes. Según parece el hombre que cuidará de sus negocios y protegerá sus archivos delictivos será el coronel Mario Raúl Hung Pacheco, actual comandante de la Fuerza Ejército.



Ernesto Paz Aguilar, ex-canciller.



Coronel Mario Raúl Hung Pacheco, el tercer ojo de los militares tiesos.



No más obligatoriedad

DETRAS DEL GENERAL

Detrás del general estaban los subalternos. El que acató la orden superior e instruyó para que se cumpliera el mandato. El que escribió los nombres de los sospechosos de atentar contra la seguridad del Estado y anotó sus nombres en una lista negra, el que le siguió la pista a todos los condenados; dirigentes estudiantiles, obreros, profesionales, campesinos e indefensas mujeres, peligrosos enemigos de la democracia.

El que tomó las fotografías en las manifestaciones populares y escuchó discursos para luego correr a procesar la valiosa información; el que sirvió de pareja, el que acosó y encañonó, el conductor del automóvil de vidrios polarizados y sin placas, el que prestó su casa para que fuera utilizada como cárcel clandestina. Los que se turnaron en la vigilia del prisionero, el que preparó el interrogatorio, el que colocó la capucha, el que conectó la picana, el experto en tortura psicológica, el que estuvo presto a que no se muriera el hombre, pues muerto no servía de nada; el que revivía a los torturados para luego proseguir aplicando los nuevos métodos en la tecnología del terror.

El que inyectó pethotal, el que violó a humildes mujeres para saciar sus instintos salvajes y que fue ascendido de grado por tan valerosa acción; el que rabió y mandó al carajo a medio mundo cuando no pudo arrancarle nada al inmolado.

El que subió el cadáver de la víctima al carro y ayudó a cavar un hoyo en la orilla de un río y enterró al termocéfalo. El que mantuvo el secreto y recibió un miserable sueldo a cambio, el que apretó el gatillo, el que aseaba la sala de torturas, el que llenaba los barriles de inmundicias para meter de cabeza al ñángara, el que negó tener al detenido y se rió de todos los Hábeas Córpus que se presentaron, el que fingió dolor frente a las madres de la Plaza La Merced, el que mintió con naturalidad ante los medios de comunicación masiva, el cínico, el que se arrodilló ante un altar para pedir por la paz social y se santiguó con las manos manchadas de sangre. El que escribió informes falsos y los engavetó, el que borraba de las listas a los que no aguantaron

la sesión de torturas.

Los que fueron condecorados con la orden del héroe por su magnífico trabajo, el que se preparó a conciencia para realizar a la perfección su tarea, el que sabe donde están los demás asesinados, el valiente que se ensañaba con el mártir siempre y cuando éste estuviera atado de pies y manos, el verdugo.

El que se escondió para no dar declaraciones que pudieran comprometerlo, el que descuartizó los cuerpos creyendo descuartizar la esperanza, el pobre diablo.

El que no descansa en paz, pues le pesan los ciento ochenta y cuatro compatriotas; el que pagaba la nómina, el que hizo de nuestra Patria una carnicería. El que propagó por el mundo un mensaje de paz mientras a sus hermanos les aplicaban "el helicóptero" o le apagaban un cigarrillo en la vagina a una mujer inermes. El que se hizo el sordo a las quejas de los detenidos, el que obedeció como un perro las órdenes de ejecutar a otros. El que dio falso testimonio y delató al vecino, el que colocó bombas en casas y automóviles de gente que dijo la verdad, el

que salía purificado de la sala de torturas, el que ocupaba todo un contingente de guardaespaldas para dar un paso, el mandamás. El que compró silencio, el que vendió información, el que se escudó en la inmunidad que le daban las armas y el poder.

El que se doblegó ante un mandato fuera de la Ley, el que experimentó con el dolor de los demás, el que vio literatura subversiva hasta en los anuncios comerciales, el que gozó con el terror y el espanto de los indefensos, el que dio más volumen a la radio para que no se escucharan los gritos y lamentos de los torturados, el que sabía demasiado y hubo que eliminarlo.

El tapujo, el santurrón, el granuja, el ruín.

Definitivamente, general, había mucha gente detrás de usted y lo peor de todo que andan libres por ahí, como si no hubieran hecho nada.



Por Ennio Maldonado

Tomado de Diario La Prensa 06-01-95.

FUERZAS ARMADAS SIGUEN

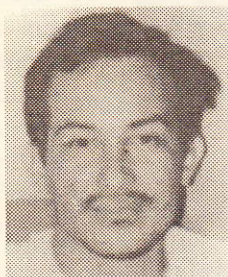
Aunque los “nuevos” oficiales de la actual cúpula castrense repiten como loros que la guerra fría terminó, en los últimos 13 meses han buscado silenciar las voces de los parientes y amigos de los desaparecidos por medio de acciones intimidatorias desde su Centro de Comunicaciones Estratégicas.

Aprovechando el amplio margen de acción que les permite el presente gobierno, tolerador de la impunidad, los cuestionados mandos militares de Honduras insisten en confrontar a sus críticos por la vía de la intimidación, la agresión física directa y más recientemente por la vía del cinismo judicial.

Es tan demoledor el impacto de los señalamientos del COFADEH en sus curtidas conciencias, que buscan infructuosamente callar nuestra moral de víctimas de sus propios desmanes. A continuación la cronología de sus esfuerzos confrontativos:

02 de marzo de 1994:

Una conversación telefónica que sostenía desde su oficina en la capital la Coordinadora General del COFADEH, Bertha Oliva de Nativí con la hermana del desaparecido Miguel Angel García Gómez en Choluteca, fue interrumpida con insultos y advertencias a Nativí: “Te vamos a matar a vos y a toda tu familia”. Enseguida el hombre que interceptó el diálogo puso en la frecuencia el audio de la marcha fúnebre y se rió burlón. Durante el día la acción fue repetida varias veces.



Miguel Angel García, nicaraguense, desaparecido.

10 de marzo de 1994:

En la línea privada de la coordinación del Comité fueron recibidas más de 15 llamadas de desconocidos desde las 8:15 de la mañana. Al levantar el auricular un hombre gemía como tonto. Durante la noche, similares llamadas fueron hechas al teléfono particular de la compañera coordinadora, en su casa de habitación.

En Honduras, la telefonía es controlada por Inteligencia Militar que disfraza de empleados a agentes “secretos” en las principales instalaciones.



11 de marzo de 1994:

La periodista Dina Meza, titular de la Comisión de Divulgación del Comité, fue perseguida por un vehículo azul, vidrios oscuros, placa 2PD 1625,



Dina Meza, periodista, perseguida.

cuando salía del hospital del Seguro Social, en horas de la madrugada. La persecución fue evadida.

12 de marzo de 1994:

De nuevo el mismo vehículo, esta vez sin placas, conducido por un hombre sospechoso, fue identificado durante la mañana cerca de la casa de la periodista. Por la tarde, un individuo ajeno al vecindario vigilaba la residencia. La denuncia fue hecha al Ministerio Público, ante el cual compareció el persecutor con una apasionada historia de inocencia y un vehículo con pintura nueva. A pesar de haber sido descubierto su cinismo por la perseguida, no se procedió contra él aún.



14 de marzo de 1994:

Mientras una delegación europea visitaba la sede del Comité para conocer nuestra versión sobre la vigencia de los derechos humanos en Honduras, un hombre que rehusó identificarse llamó por teléfono al número privado de la oficina de la presidencia para emitir sonidos guturales de terror. Durante la entrevista este tipo de llamadas fueron repetidas varias veces.



27 de junio de 1994:

Eran las 8:15 de la mañana. Como de costumbre, la secretaria revisó la receptora automática de mensajes. Al escuchar la cinta,

SS

LA CONFRONTACION

encontró la voz de los cobardes: **"Esta es la primera advertencia. Escuchen perras, ya dejen de buscar a sus perritos porque están muertos. Tengan cuidado con lo que hacen; dejen de hablar tanto por la radio y la televisión. No quieren más desaparecidos, verdad?, porque si no ustedes van a ser las siguientes. Sanidad Social"**.

El SS es un grupo paratmilitar que surgió en Honduras en 1982 para intimidar a los parientes de los primeros desaparecidos que exigían la verdad ante las autoridades civiles y militares de la época. Luego fue sustituido por la Alianza de Acción Anticomunista (AAA) y otros grupos clandestinos, dependientes de la Unidad de Contrainteligencia del Ejército.

26 de agosto de 1994:

Otra vez, la voz del SS dejó en la receptora el siguiente mensaje:

Puedo poner ahí la denuncia de un perrito que se me perdió? ja ja ja ja..."

SS

11 de noviembre de 1994:

El Vocero de la Fuerza de Seguridad Pública, capitán Danilo Orellana, insinuó que la dirigencia del Cofadeh podría ser demandada por difamación, injuria y calumnia por sus declaraciones en el caso del secuestro-asesinato del ciudadano Orlando Jiménez Antúnez en julio de 1994, en el cual tuvieron responsabilidad los oficiales José Antonio Cuellar Ríos (coronel), Marden Romero Sánchez y Ramón Oswaldo Tinoco (subtenientes) y Donaldo Molina Villalobos (sargento).



Capitán Danilo Orellana, portavoz de la policía.

Bertha de Nativí afirmó en su oportunidad que "en este caso hay muchas cosas que la opinión pública debe saber. Primero, que fue una ilegalidad y un abuso de poder por parte de los militares que hicieron este tipo de trabajo y segundo, que el hecho refleja la ausencia de

justicia", por lo que la dirigente recomendó que "deben ser castigados los militares que actuaron en este caso"

10 de diciembre de 1994:

Comienza la guerra psicológica con libelos y hojas volantes en contra de los familiares de los desaparecidos, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos y el Ministerio Público, por haber iniciado las exhumaciones de los restos del desaparecido Nelson Mackey Chavarría el 7 de diciembre en el Sur.

**NO IMPORTA
HAY QUE DECIR
QUE ESTOS
SON**



En los volantes tirados incluso en la peatonal de acceso a la Corte Suprema de Justicia hay evidente incomodidad por el desentierro de la verdad, y se pretende desviar la atención asociando en el contenido un plan político concebido desde Cuba.

13 de enero de 1995:

En esta fecha las dirigentes del Comité fueron advertidas de un plan para asesinar al educador en derechos humanos Leonel Casco Gutiérrez, por agentes especiales de las Fuerzas Armadas. La acción criminal, concebida para confundir a la opinión pública, sería ejecutada entre el 9 y el 14 de enero para salirle al paso a una acción urgente en contra de los asesinos del mayor retirado Juan Pablo Rivas Calderón, que preparaba el **Codeh**. Casco Gutiérrez participaba en un seminario en San José, Costa Rica, por lo que escapó al plan criminal.



Leonel Casco, educador, amenazado a muerte.

20 de enero de 1995:

Después de su arribo al país, mientras Leonel Casco caminaba hacia la estación de buses para dirigirse a las oficinas del Cofadeh en horas de la mañana, dos individuos a bordo de motocicletas lo interceptaron para reconocerlo,



cronología del silencio...

fingiendo pedir una dirección en la colonia 3 de mayo de Comayaguela. Al sentirse evidenciados, desaparecieron.

03 de marzo de 1995:

Durante el desarrollo del plantón cívico el primer viernes de marzo en la Plaza La Merced, dos agentes encubiertos asignados a la unidad de Comunicaciones Estratégicas (Battallón de la Muerte 3-16) vigilaron y persiguieron a la coordinadora Bertha Nativí. Uno de los granujas fue identificado por su pseudónimo de Ismael Cárdenas y fotografiado además para el archivo de las figuras del retablo.



Ismael Cárdenas,
espía del 3-16.

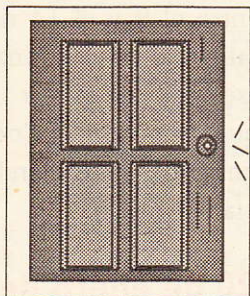
El 14 de marzo de 1995:

El Frente Patriótico Morazanista (FPM), sigla de fachada creada por las Fuerzas Armadas para delinquir en la década pasada y utilizada ahora para inducir confusión con ruidos y papeles, suscribió una carta contentiva de amenazas en contra del ex-vicepresidente del CODEH y actual asesor jurídico del Cofadeh en Tegucigalpa, licenciado Oscar Aníbal Puerto. La misiva fue enviada en sobre sellado a la sede del Comité en el segundo piso de la farmacia Santa Bárbara, en el barrio Los Dolores de la capital, a través del sistema del apartado postal. En el espacio del remitente escribieron a máquina **Foro Permanente de Municipios (FPM)**, que no existe. La sigla, sin embargo, es la que ellos inventaron hace años para presumir.



15 de marzo de 1995:

El allanamiento de nuestras oficinas anunció el Juez de Instancia Militar, capitán Jacobo Castellanos, para arrestar al Teniente José Dolores Rivera, oficial acogido a la protección humanitaria del Comité desde el 06 de febrero, después de cinco meses de incomunicación y castigos. El teniente Rivera denunció en rueda de prensa el 13 de marzo en nuestra sede que oficiales superiores en rango pretendían matarlo, para ocultar sus propios delitos, y que por ello solicitaba nuestra protección. El allanamiento no se efectuó aún.



El 19 de marzo de 1995:

Una hoja volante sin firma, con dibujos de cruces y las palabras: Tumba, Scorpiom, goce y las letras D,H,K y L,K, fue dejada en la entrada a la residencia del educador Leonel Casco, quien la estrujó arrojándola a la calle. Por la noche del día siguiente el mismo apócrifo fue dejado junto al candado de la puerta principal de acceso a la vivienda.



El 28 de marzo de 1995:

El identificado agente del batallón de la muerte 3-16, Ismael Cárdenas, cuya foto fue publicada por diarios de Tegucigalpa y San Pedro Sula, apareció en el bufete del poco conocido abogado Arturo Ramírez Gómez asegurando llamarse José Mario Hernández Barahona y proponiendo “arreglos extrajudiciales” a la coordinadora Bertha Nativí, ante quien dijo sentirse “dañado” en sus derechos humanos. Bertha fue citada por el abogado Ramírez Gómez y sus asociados el 30 de marzo a las 10:00 de la mañana, en su bufete, para “negociar” una posible demanda judicial en los tribunales por “difamación y calumnia”. Sin saber con quien trataba, el apoderado legal del espía recibió esa misma fecha una respuesta contundente: **la justicia no se negocia, concurrámos al Tribunal a dirimir la situación en igualdad ciudadana.** No ha habido hasta ahora más comunicaciones.



Bertha de Nativí,
coordinadora del
Cofadeh.

El 20 de abril de 1995:

El General Luis Alonso Discua Elvir, jefe de las Fuerzas Armadas, anuncia que su institución demandará a la dirigencia del COFADEH porque han acusado “en forma injusta, sin tener pruebas”, a miembros de la Guardia de Honor Presidencial que habrían contribuido en operativos para crear caos en la seguridad del gobernante en San Pedro Sula, mediante el estallido de una granada dentro de los anillos de precaución presidencial.



Discua Elvir, profeta.

El 27 de abril de 1995:

Los oficiales del ejército Jordy Ramón Montañola Escobar (ex-



cronología del silencio...

jefe de la Sección de Análisis y Procesamiento de Información del 3-16 y actualmente Comandante del Batallón de Comunicaciones Estratégicas de las Fuerzas Armadas), Antonio Guzmán Alvarenga y Alexis Misael Luque (agentes especiales asignados a la seguridad del Presidente Reina) presentaron una querrela ante el Juzgado Primero de Letras de lo Criminal de Comayaguela contra Bertha Oliva de Nativí, Coordinadora del COFADEH y Mery Agurcia, por el delito de calumnia continuada. La acción fue promovida por el abogado Rafael Medina Díaz y registrada bajo el Expediente No.384-95-9, en el Libro de Entradas del Juzgado.

10 de mayo de 1995:

Una segunda carta del inventado Frente Patriótico Morazanista

FPM

llega a nuestra sede saturada de grandilocuencia política para impresionar y malévolas inducciones de orejismo institucional para armar la duda interna en el **Cofadeh**. En ingenioso tono de principiantes, la Dirección Nacional de este escuadrón de la muerte pretende hacerse pasar como organización armada disidente “regañando” a nuestra coordinadora general por unas declaraciones públicas en las que ella condenó a dicho “FPM” como un ardid castrense utilizado para poner bombas, hacer allanamientos nocturnos, intervenir comunicaciones y matar en nombre de causas populares. La misiva fue enviada mediante el mismo procedimiento que la primera.

Seguramente la cronología de la intimidación y el silencio continuará, pero desde ya esta muestra refleja la desesperación de esos criminales cobardes que ante el avance de la lucha contra la impunidad buscan refugiarse en el anonimato, pero más temprano que tarde, sus fortalezas serán alcanzadas donde quiera que las construyan.

Para lograr ese propósito todas las fuerzas nacionales e internacionales son activadas desde ya con el calor de la solidaridad humana.

**nosotros diremos siempre:
de los hechos y de los hechos, ni olvido ni perdón.**

Intervención Telefónica



Ernesto Alonso Rojas, periodista.

Para intimidarlo en protesta por una entrevista audaz del periodista Ernesto Alonso Rojas, corresponsal de Radio América en San Pedro Sula, el represivo coronel Alexander Hernández Santos instruyó a su compinche el coronel Luque- jefe regional de Hondutel- que interviniera el teléfono 51-1966 asignado en su casa al comunicador.

Rojas denunció que el tres de febrero interrogó sobre sus crímenes al “remodelado” Hernández Santos, inspector de la Fuerza de Seguridad Pública (FSP), lo cual incomodó a dicho individuo.

También los periodistas Gabriel García Ardón y Joel Morales denunciaron tener intervenidos sus teléfonos particulares en San Pedro Sula, por lo que responsabilizaron a las fuerzas del “orden” de cualquier atentado en contra de sus familias.

El 21 de febrero, el diputado nacionalista César Castellanos Madrid presentó en el seno del Congreso Nacional un anteproyecto de ley contra la intervención telefónica, argumentando que ésta viola la intimidad, la moral y la Constitución de la República que protege la secretividad de las comunicaciones. La moción fue turnada a la comisión de dictámen para su estudio y análisis.

NUESTRO ACCIONAR EDUCATIVO

(enero-abril de 1995)

ACTIVIDADES	
Talleres	7
Seminarios	2
Conferencias	10
Total	19

SECTORES	
Estudiantes	470
Maestros	84
Mujeres	35
Pobladores	334
Religiosos	81
Promotores sociales	1
Autoridades	50
Obreros Organizados	50
Profesionales	2
Niños	100
Líderes Políticos y Sociales	120
Activistas de DDHH	7
Total	1,334

Transformar la estructura militar para las necesidades de la población.

- EJERCITOS + DEMOCRACIA + PAZ

Seminario-Taller

Abolición de los Ejércitos en Centroamérica y

Retiro de Bases Militares Extranjeras

Patrocinado pro CODEHUCA-COFADEH

Fecha de Realización: del 19 al 22 de abril de 1995 en Tegucigalpa.

Participantes: Comisiones de Derechos Humanos afiliadas a CODEHUCA, de los países de Centroamérica, Panamá y Belice.

Objetivos:

- 1.- Analizar la Desmovilización de las fuerzas irregulares y gubernamentales como pasos previos a la desmilitarización.
- 2.- Señalar las condiciones necesarias que deben contemplarse para la efectiva desmilitarización.
- 3.- Determinar los procesos sociales y fuerzas internas y externas que coadyuven al proceso de desmilitarización, incluido el retiro de bases militares en la región.
- 4.- Llamar la atención sobre el proceso de desmilitarización y la necesidad de darle seguimiento y tratamiento adecuado.
- 5.- Promover una campaña dirigida al desarme y la desmilitarización de Centroamérica.
- 6.- Analizar propuestas existentes o nuevas, que desde la sociedad civil centroamericana han sido planteadas en relación a cómo debe ser dirigido el proceso de desmilitarización en la región.

Expositores:

Dr. Marcos Roitman, politólogo español

"Militares y política en América Latina con énfasis en Centroamérica".

Dr. Daniel Camacho, coordinador de Codehuca

"Desmilitarización y proceso democrático centroamericano desde la perspectiva de los derechos humanos"

Lic. Leticia Salomón, académica universitaria

"La desmilitarización en C.A. y la participación de la sociedad civil".

Lic. Matías Fúnes, filósofo, catedrático universitario.

"Tienen los ejércitos futuro en Centroamérica?"

Conclusiones para Honduras:

- 1.- Educar a la población para la paz
- 2.- Transformar la estructura militar para las necesidades de la población.
- 3.- Integrar un grupo permanente pro desmovilización
- 4.- Hacer reformas constitucionales
- 5.- Demandar a los Estados Unidos por los daños políticos, económicos y sociales ocasionados por la militarización del país.
- 6.- Que la desmilitarización es condición indispensable para lograr una real democratización en la sociedad.
- 7.- La militarización en C.A. responde a los intereses de los EUA en base a los intereses estratégicos diseñados por el Comando Sur, con sede en Panamá.
- 8.- En Honduras el ejército surge para proteger la inversión norteamericana (compañías bananeras) y para hacer comparsa de la guerra fría.
- 9.- La cultura de la violencia que vive Honduras se ha originado en los ejércitos que han combatido las ideas militarmente.

A RÍOS MONT

El Comité de Familiares de Detenidos-Desaparecidos en Honduras (COFADEH) a la opinión pública centroamericana hace saber:

Que rechazamos con convicción institucional la presencia en nuestro país del ex-presidente de Guatemala, Efraín Ríos Mont, porque él representa la impunidad, la intolerancia y en suma, la política de violación a los derechos humanos en la región.

La participación de Ríos Mont en un evento social montado en el Congreso Nacional de Honduras por un político presidencialista que utiliza dineros del pueblo, insulta otra vez la dignidad mancillada de las víctimas sedientas de justicia.

Es ridículo discutir la violencia y la criminalidad regionales con los protagonistas del silencio y la complicidad en el pasado y en el presente.

Es demagógico afirmar emocionados ante violadores de la vida que lo más importante son los seres humanos, antes que los capitales. Siempre ha sido al revés.

A Ríos Mont el Santo Padre le pidió en su visita a Guatemala en 1982 **clemencia** para los miles de desaparecidos y supliciados extrajudicialmente, incluido un hondureño secuestrado por fuerzas represivas de aquél país. Nosotros le pedimos que se vaya!

No hizo nada entonces cuando tenía poder para cambiar la barbarie, menos hoy de político "redentor".

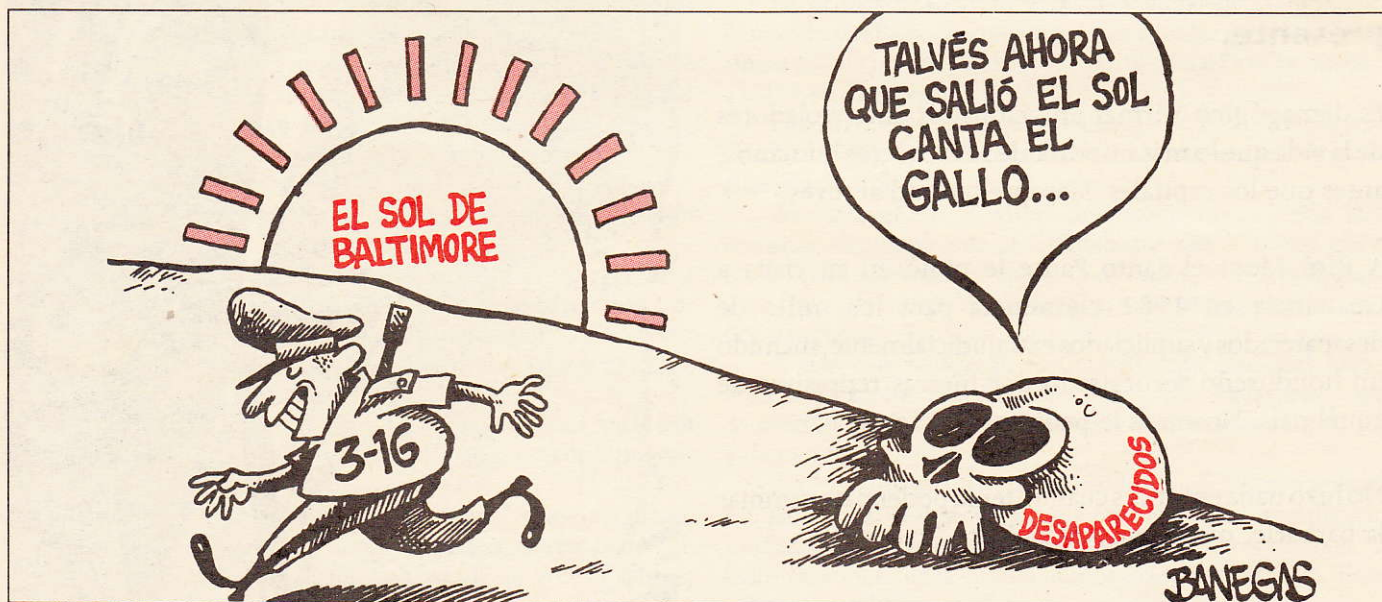
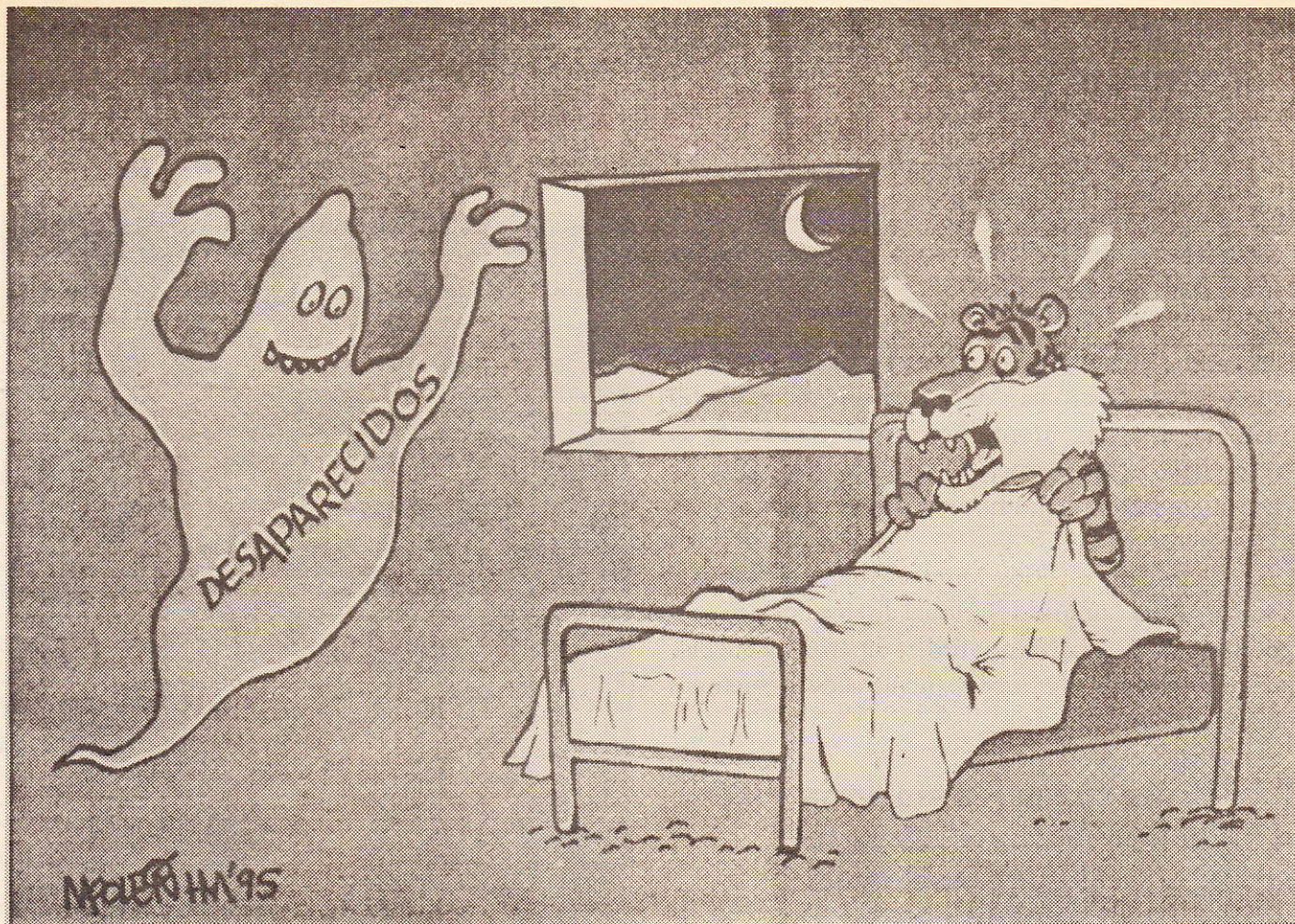
**de los hechos y de los hechores diremos siempre
ni olvido ni perdón**

COFADEH

Tegucigalpa, 23 de febrero de 1995



General Efraín Ríos Mont: "soy popular en Guatemala", pero es violador de derechos humanos, señor.



SUSCRIPCION (anual)

Honduras	L. 35.00
América Latina	\$ 20.00
Europa	\$ 35.00
Estados Unidos	\$ 30.00



COFADEH

DIRECCION

Apartado Postal 1243
Teléfono 37-9800
FAX 37-9800

Suscríbase